



Al servicio de la Justicia y de la paz social

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADO SUSTANCIADOR
MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Medellín D.E. de C., T., e I., dieciocho de abril de dos mil veintitrés.

PROCESO	Ejecutivo
DEMANDANTE	Bancolombia S.A.
DEMANDADO	Piedad Elena Sánchez Rivera
PROCEDENCIA	Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado
CUDR	05266-31-03-001-2016-00048-01
RADICADO INTERNO	063-17
PROVIDENCIA	078-23
DECISIÓN	La omisión de sustentar la apelación de la sentencia, hace que deba declararse desierto el recurso. DECLARA DESIERTO RECURSO.

I. ASUNTO A RESOLVER.

Procedente del Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado, arribó a esta Corporación el proceso de la referencia, con miras a desatar la apelación interpuesta por la parte demandada contra la sentencia de 9 de agosto de 2017, dentro del proceso ejecutivo de Bancolombia S.A. frente a la señora Piedad Elena Sánchez Rivera.

Sin embargo, el referido recurso de apelación debe ser declarado desierto, por las razones que pasan a explicarse:

II. ANTECEDENTES.

1.- LA DEMANDA.

1.1.- Lo pretendido. Mediante escrito presentado el tres de febrero de 2016, Bancolombia S.A. demandó a Piedad Elena Sánchez Rivera para que, previo

el trámite del proceso ejecutivo, se librara mandamiento de pago a su favor, por la suma de \$279.537.999 correspondiente al capital contenido en el pagaré número 3440082869, suscrito el 31 de octubre de 2014; \$33.100.865 por concepto de intereses de plazo causados desde el 31 de octubre de 2014 al 31 de julio de 2015.

Adicionalmente, reclamó que el apremio se extendiera a los intereses moratorios causados sobre el anterior capital, a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera, desde el tres de febrero de 2016, hasta el pago total de la obligación.

1.2.- Los fundamentos fácticos. En sustento de lo pedido, la actora adujo que la demandada suscribió el 31 de octubre de 2014, a favor de Bancolombia S.A., un título valor consistente en un pagaré número 3440082869, por valor de \$300.000.000, en el cual se pactó como intereses corrientes DTF+9.250 puntos efectivo anual y una tasa de interés de mora máxima legal permitida.

Dijo que, al no haberse cumplido con el pago de dichas obligaciones en los plazos y formas pactadas, se genera el pago de intereses moratorios en forma acordada en el pagaré.

Adujo que, la obligación que está exigiendo y respaldada en el pagaré, es clara, expresa y actualmente exigible; título valor que goza de la presunción de autenticidad.

2.- LA RÉPLICA.

2.1.- Las excepciones planteadas. Librado el mandamiento de pago, conforme auto de ocho de febrero de 2016, y notificada la ejecutada por intermedio de apoderada judicial el uno de noviembre de ese año (ver folio 38, cuaderno principal del expediente físico), ésta se pronunció planteando las excepciones que denominó *“falta de cumplimiento de requisitos para validez del título”, “falta de los requisitos en el título para ser exigible”, “cobro de lo no debido” e “imposibilidad en condena en costas”*.

2.2.- Fundamento fáctico de las defensas. En suma, argumentó que el título valor que se arrimó para el cobro de esta ejecución, indica en su primera parte el valor entregado, pero en la forma de pago se anota “hasta la completa

cancelación de la deuda”, es decir que, se trata de un pagaré sin vencimiento cierto. Afirmó que, faltando este elemento fundamenta en el título valor, podía concluirse que al mismo le falta claridad.

Aseveró que en el pagaré no se estableció de manera clara los vencimientos ni la forma de pago de la obligación, por tanto, se está cobrando un pagaré no vencido.

Dijo que, como la buena fe debe presumirse, no debe condenarse en costas; atendiendo a que la participación que realiza en este trámite no es de mala fe, pues, por el contrario, sus afirmaciones están respaldadas por hechos y documentos.

3.- LA SENTENCIA APELADA.

En sentencia proferida en audiencia del nueve de agosto de 2017, el *a quo* desestimó las excepciones formuladas por la ejecutada y, en consecuencia, ordenó seguir adelante con la ejecución, conforme se había dispuesto en el mandamiento de pago de fecha 8 de febrero de 2016. Así mismo, dispuso la liquidación del crédito y el avalúo y remate de los bienes embargados o que se llegaren a embargar en el proceso, con la respectiva condena en costas a la demandada.

Después de precisar que las tres primeras excepciones propuestas por la demandada, referentes a los aspectos formales del título ejecutivo, debieron presentarse como recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo, conforme lo establece el inciso segundo del artículo 430 del C. General del Proceso, por tanto, no eran susceptibles de estudio al momento del proferimiento de la sentencia, señaló el Juzgado que, el título valor aportado como base de recaudo, sí cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 422 del C. General del Proceso.

De otro lado, respecto de la excepción denominada “*imposibilidad de condena en costas*”, dijo que las costas son el resarcimiento de los gastos realizados por el litigante vencedor o favorecido, por tanto, no era necesario establecer la buena o mala fe de la parte demandada; que solo bastaba verificar que la parte haya salido vencida en el pleito para imponerle la condena en costas, ya que esta tiene un carácter meramente objetivo.

4.- LA APELACIÓN. Dentro de la audiencia, la apoderada de la ejecutada formuló recurso de apelación señalando que las afirmaciones realizadas por el juzgado de primera instancia en su decisión, no apreciaron en debida forma las condiciones que exige el artículo 709 del Código de Comercio, por tanto, no se estaba en presencia de una validez como tal del título.

5.- ACTUACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA. Por auto del 12 de septiembre de 2016, se admitió la apelación formulada; por tanto, con proveído del 13 de marzo de 2023, dando aplicación al artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto 806 de 2020, se concedió el término de cinco (5) días a la parte apelante para que sustentara el reparo formulado contra la sentencia de primera instancia.

El referido auto fue notificado por estados No 43 del 15 de marzo de 2023, por lo que el término de los (5) cinco días concedido para sustentar el recurso, venció en silencio por la parte recurrente, acorde con la constancia secretarial del 14 de abril del año en curso.

6.- CONCLUSIÓN. Como consecuencia de lo anterior, esto es, como el recurso no fue sustentando en primera, ni en esta instancia dentro del término legalmente concedido para tal efecto, habrá de declararse desierta la alzada en contra de la sentencia de primer grado, al tenor de lo contemplado en el inciso 3° del artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, que *ad literam*, estatuye:

*“Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes. De la sustentación se correrá traslado a la parte contraria por el término de cinco (5) días. Vencido el término de traslado se proferirá sentencia escrita que se notificará por estado. **Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarará desierto**”* (Resalto propio).

Consecuente con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en Sala Unitaria de Decisión Civil,

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, LA SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, **DECLARA DESIERTO** el recurso de apelación interpuesto por la demandada PIEDAD ELENA SÁNCHEZ RIVERA,

frente a la sentencia de 9 de agosto de 2017, dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Envigado, dentro del proceso ejecutivo de Bancolombia S.A. frente a la señora Piedad Elena Sánchez Rivera.

En firme la presente decisión, devuélvase el expediente digital al Juzgado de origen para que continúe con el trámite del proceso.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MARIO GÓMEZ LONDOÑO', with a stylized flourish at the end.

MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Magistrado

Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022